



A todas las y los compañeros:

En seguimiento de las circulares anteriores, en las que les hemos estado informando sobre los acontecimientos que se generan en el ámbito de las telecomunicaciones en los planos nacional e internacional y que son de gran interés para la organización debido a que en muy buena medida impactan, ya sea en nuestra materia de trabajo o en el aspecto regulatorio al que estamos sujetos, presentamos el siguiente informe de los hechos más recientes.

El pasado 10 de junio de 2020, el Senador Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) presentó una iniciativa que fue analizada por el grupo de trabajo de telecomunicaciones del CEN. El contenido de la iniciativa es el siguiente:

- Se trata de una Reforma Constitucional a los Artículos 27 y 28 para integrar las funciones que actualmente corresponden a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un nuevo ente al que se denominaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), tomando como referencia el modelo español de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
- El INMECOB sería un órgano constitucional autónomo que contaría con personalidad jurídica, técnica, operativa y de gestión. Este nuevo instituto no funcionaría como una autoridad convergente, ya que solo asumiría las funciones de la CRE en lo referente al sector eléctrico, prescindiendo de las funciones regulatorias de otros sectores afines como el ferroviario, aeroportuario, hidrocarburos y el servicio postal, atribuciones que sí considera el modelo español.
- Ello se sustenta en la expectativa de obtener, por medio de la fusión, una disminución de gastos de operación del 17.68% en el presupuesto asignado actualmente a la CRE, el IFT y la COFECE, lo que se refuerza en el cuerpo del articulado con la disposición de que los funcionarios del INMECOB deberán ajustarse a la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, por lo que ninguno ganaría más que el presidente de la república.
- El INMECOB estaría integrado por 5 consejeros, uno de los cuales fungiría como presidente. **Este organismo sesionaría por pleno o por sala y contaría con dos salas: una enfocada a los temas de mercados y la segunda a los temas de supervisión y regulación de redes.** Por otra parte, **el método de elección de los consejeros se modificaría, ya que quien propondría candidatos sería el Senado y quien definiría sería el ejecutivo.**
- La iniciativa ratifica las funciones y atribuciones de los reguladores anteriores sin mayores cambios, por lo que **subsisten los mandatos constitucionales del Artículo 28 en el sentido de que la regulación en telecomunicaciones, de manera permanente, sería asimétrica, así como la disposición que evita la suspensión del acto reclamado en los amparos contra actos del regulador;** consideramos que hace falta abordar de manera más profunda los temas relativos al desarrollo, inclusión y digitalización de la economía del país.
- La iniciativa considera en su Transitorio Séptimo, la actualización en 180 días a partir de que sea aprobada la reforma de las leyes reglamentarias en la materia. El Artículo Transitorio Octavo señala, adicionalmente, que todos los actos jurídicos emitidos por el IFT y los demás reguladores, previos a la integración del INMECOB, **conservarán su validez, lo que deja firmes las resoluciones de este organismo en contra de Telmex como la separación funcional, la equivalencia de insumos, el régimen tarifario y el no acceso a los servicios convergentes.**

Ante la presión y resistencia de los distintos intereses que prevalecen en los sectores involucrados, el Senador Ricardo Monreal Ávila suspendió la presentación de su iniciativa el 14 de junio para realizar una etapa de consultas, lo que abre la posibilidad para que el STRM incida, desde su estrategia y plan de acción, en la promoción de sus propuestas para impulsar un cambio en su política de estado en el sector de las telecomunicaciones que deberá estar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a partir de proyectos como la Agenda Digital, el Plan Nacional de Banda Ancha y, en general, todas aquellas disposiciones que fortalezcan la inclusión digital contempladas en el Artículo 6º Constitucional, ya que la pandemia demostró que las telecomunicaciones son un instrumento estratégico para la reactivación económica del país.

Dentro de nuestra estrategia y con la orientación de nuestro **co. Francisco Hernández Juárez**, hemos establecido un acercamiento con el Sen. Ricardo Monreal para compartirle nuestro punto de vista, destacando la necesidad de una Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, nuevas políticas públicas; seguimos insistiendo en reactivar la mesa intersecretarial; en los foros que organizamos con nuestros aliados en la UNT, incluimos a las telecomunicaciones como parte fundamental del Plan Nacional de Infraestructura que estamos impulsando para reanimar la economía del país y le hemos dado seguimiento a los recursos legales promovidos por la empresa y el sindicato para defender la viabilidad de nuestra fuente de empleo y nuestros derechos laborales, destacando los siguientes aspectos:

En días pasados, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad descartar el amparo en revisión interpuesto por Telcel en contra de la validez del Artículo 45 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que permite que, en caso de ausencia, los comisionados puedan emitir y fundamentar su voto por escrito o por medios electrónicos. Ello cuestionaría la validez de varias resoluciones del regulador en contra de Telmex y Telcel que se han dado de esta manera, entre otras la relativa a la separación funcional de Telmex.

La resolución de la SCJN establece un precedente negativo que podría utilizarse para descartar el amparo promovido por América Móvil en contra de la separación funcional de nuestra fuente de trabajo, aunque cabe aclarar que, a diferencia de Telcel, nosotros no hemos avalado ninguno de los actos del IFT que se han dado bajo las condiciones previstas por el Artículo 45 de la LFTyR antes mencionado; por lo que la SCJN decidió turnar nuevamente el amparo al tribunal colegiado de circuito para resolver lo conducente.

El STRM considera inadmisibile que los funcionarios del regulador emitan su voto estando incluso fuera del país, en asuntos trascendentales que afectan los derechos laborales adquiridos y la viabilidad de fuentes de trabajo por lo que, con apoyo de nuestro equipo de asesores jurídicos y de los asesores de la empresa, seguiremos buscando alternativas para combatir este tipo de conductas, teniendo claro que legalmente es a la empresa a quien le corresponde combatir este tipo de actos.

Compañeras y compañeros: con el presente reporte actualizamos la información de las distintas actividades que realizamos en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Los convocamos a estar atentos al plan de acción que estamos implementando para impulsar la estrategia sindical y promover un desarrollo incluyente de las telecomunicaciones.

FRATERNALMENTE
“Unidad, Democracia y Lucha Social”

Grupo de Telecomunicaciones